

RESOLUCIÓN 022 DEL 02 DE MARZO DEL 2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 37.272.899 Y SE ORDENA LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO 041 DE 2016.”

El Funcionario Ejecutor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Norte de Santander en uso de las facultades legales y estatutarias conferidas por el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006; el artículo 98 y siguientes del C.P.A.C.A; el artículo 826 del Estatuto Tributario, la Resolución 5003 del 17 de septiembre de 2020 procedente de la Dirección General del ICBF, y la Resolución 1476 del 2 de octubre de 2017 emanada de la Dirección Regional del ICBF-Norte de Santander mediante la cual se designa como Funcionario Ejecutor a un servidor público y,

CONSIDERANDO:

Que el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, dentro del Proceso de Impugnación de la Paternidad, con radicado 54001-31-60005-2015-00412-00, promovido por el señor EDWIN ALEXANDER ROMERO VILLALTA, contra **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, identificada con cédula de ciudadanía **31272899**, profirió sentencia el 23 de junio de 2016, en la cual declaró que el menor **YULIAN ANDREI ROMERO PARRA** nacido en Cúcuta el 21 de noviembre de 1998, **no** es hijo biológico del demandante, y tomó otras medidas, entre esas, la de condenar a la demandada a reembolsar al ICBF los dineros que ésta entidad canceló al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por concepto de la práctica de la prueba de ADN ordenada en dicho proceso, los cuales ascienden a la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$541.446,00)**.

Que atendiendo lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, las entidades públicas del orden nacional encargadas del recaudo de rentas o caudales públicos del nivel nacional tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones a su favor.

Que, *el numeral 2° del artículo 99 del CPACA, indica que:* “Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: (...) 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. (...)”.

Que, el artículo 828 del E. T., precisa lo siguiente: “Prestan mérito ejecutivo: (...) 5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.”

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Que entre los folios **1 al 20** del expediente, obran actuaciones remitidas por el Despacho Judicial y diligencias relacionadas con el cobro persuasivo.

Que mediante Auto 146 **del 11 de octubre de 2016**, el Funcionario Ejecutor avocó el conocimiento del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo **041 de 2016**, documento visto a folio **21** del expediente, el cual tiene como fundamento la providencia del **23 de junio de 2016**, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad, dentro del Proceso de Impugnación de Paternidad, promovido en contra de **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, identificada con cédula de ciudadanía **31272899**.

Que mediante Resolución **097 del 12 de octubre de 2016**, se libró mandamiento de pago a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Regional Norte Santander, en contra de la señora **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$541.446,00)**, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso. (Folio 22).

Que a folio 23, aparece oficio dirigido a la Coordinadora Financiera del ICBF- Regional Norte de Santander, al que se allega copia del Auto 146 del 11 de octubre de 2016, a través del cual el Funcionario Ejecutor avocó el conocimiento del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo **041 de 2016**.

Que entre los folios 24, al 26, y 31 al 34, obra oficio dirigido a la demandada solicitándole comparecer al ICBF, para notificar la Resolución **097 del 12 de octubre de 2016**, por la cual se libró mandamiento de pago a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Regional Norte Santander; así mismo se encuentra constancia de devolución por la causal "NO RESIDE"; en consecuencia de lo cual, se allega copia del acto administrativo mencionado, el cual es devuelto por la causal indicada anteriormente.

Que entre los folios 55 al 57, se encuentra oficio y aviso del Mandamiento de Pago, y copia del diario La Opinión del 21 de diciembre del 2016, en el cual, se hizo la publicación del mismo para la notificación a la demandada.

A folio 27, encontramos Consulta de Información Comercial CIFIN, en la cual se reporta cuenta vigente a nombre de la deudora en el Banco Caja Social.

Que entre los folios **28 al 30 y 53**, se encuentra Auto 176 del 22 de noviembre de 2016, por el cual se decretan medidas cautelares previas y oficio dirigido en el mismo sentido al Banco BCSC; embargo que fue registrado en el sistema de la entidad financiera aludida.

Que entre los folios 35 a 52, reposan oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja; solicitando información acerca de vehículos

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

a nombre de la demandada y respuestas dadas a los mismos en las que no se reportan datos de automotores registrados a nombre de la misma.

A folio 54, encontramos Consulta de Información Comercial CIFIN, en la cual se reporta cuenta no vigente y cuenta embargada del BCSC a nombre de la deudora.

Que a folios 58, al 60, 61, 63 y 64, 70 al 72, se encuentra constancia de ejecutoria; Resolución 006 del 26 de enero del 2017, por la cual se ordena seguir adelante con la ejecución; liquidación de crédito; Auto 017 del 31 de marzo del 2017, por el cual se liquida el crédito y gastos del proceso; oficio mediante el cual se da traslado a la liquidación; oficio mediante el cual se allega copia del mencionado acto administrativo a la deudora; Auto 018 del 06 de abril del 2017, mediante el cual se aprueba integralmente la liquidación del crédito y oficio dando traslado del Auto que aprueba la liquidación del crédito y devolución del mismo por la causal "NO RESIDE".

Que a folio 73 al 75, aparece invitación remitida a la deudora a fin de buscar alternativas de pago que le permitan saldar la deuda existente y constancia de devolución del mismo, por la causal "NO RESIDE".

Que a folios 76, se encuentra liquidación de los intereses moratorios del crédito.

Que entre los folios 77 al 93, **reposan** oficios enviados a las Oficinas de Tránsito de Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja; Instrumentos Públicos de Ocaña, Pamplona, Cúcuta y Chinácota solicitando información acerca de vehículos y bienes a nombre del demandado y respuestas dadas a los mismos en las que no se reportan datos de automotores, ni inmuebles registrados a nombre de la deudora.

A folio 94, encontramos Consulta de Información Comercial CIFIN, en la cual se reporta cuenta no vigente y cuenta embargada del BCSC a nombre de la demandada.

Que entre los folios 95 al 112, reposan oficios solicitando información de la deudora enviados a los bancos de Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia y Scotia Bank Colpatría; y respuestas a los mismos, en la que no se reportan cuentas a nombre de la misma.

Que entre los folios del 113 al 163, reposan oficios dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Pamplona, Ocaña, Cúcuta y Chinácota; Secretarías de Tránsito Departamental de Norte de Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja y a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAU Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatría y respuestas a los mismos en las que no se encontraron cuentas, vehículos, ni bienes a nombre de la deudora, a excepción de Bancolombia y Tránsito de Los Patios.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Que a folio 155, se encuentra liquidación de los intereses moratorios del crédito.

Que entre los folios 156 al 159, y 162, aparece solicitud de embargo a la Oficina de Tránsito de los Patios, oficio de embargo a Bancolombia, y registros de las medidas decretadas por las entidades aludidas.

Que entre los folios 164 al 196, reposan oficios dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Pamplona, Ocaña, Cúcuta y Chinácota; Secretarías de Tránsito Departamental de Norte de Santander, Villa del Rosario, Pamplona, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja y a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAU Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatría y respuestas a los mismos en las que no se encontraron bienes, vehículos y cuentas a nombre de la deudora.

Que a folio 197, encontramos Constancia de Suspensión de Términos ordenados a través de las Resoluciones 3110 del 1° de abril del 2020 y 3601 del 27 de mayo del 2020, expedidas por la Dirección General del ICBF, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020

Que a folios 198, se encuentra liquidación de los intereses moratorios del crédito.

Que a folios 199 y 200, encontramos solicitud de embargo de cuenta del Banco Caja Social y respuesta del mismo en la que registra el embargo.

Que entre los folios del 201 al 245, reposan oficios dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Pamplona, Ocaña, Cúcuta y Chinácota; Secretarías de Tránsito Departamental de Norte de Santander, Villa del Rosario, Pamplona, Cúcuta, Los Patios, Departamental de Norte de Santander, Convención, Ocaña, Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja y a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAU Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatría y respuestas a los mismos en las que no se encontraron bienes, vehículos, ni cuentas a nombre de la deudora a excepción del Banco Caja Social, con cuenta ya embargada, y Davivienda con cuenta activa.

Que a folios 246, al 248, se encuentra liquidación de los intereses moratorios del crédito, y solicitud de embargo de cuenta del Davivienda.

Que entre los folios 249 al 260, reposan oficios enviados a los bancos Av. Villas, Pichincha, GNB Sudameris, ITAU Corpbanca, Occidente, Falabella, Coomeva, Bogotá, Caja Social, Davivienda, Popular, Agrario, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatría, solicitando información acerca de cuentas registradas a nombre de la demandada y respuestas dadas a los mismos en las que no se aportan datos diferentes a los ya conocidos.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Que a folios 264 y 265, aparece certificación expedida por el Contador de la Regional ICBF-Norte de Santander y Registro SIIF- Nación en la que se indica que a 01 de marzo del 2022, la demandada adeuda por concepto de prueba de paternidad la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$541.446,00)**.

PARTE NORMATIVA

Que el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8° de la Ley 791 de 2002, señala que: “La acción ejecutiva prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

Que el artículo 817 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, reglamentó el término de prescripción a cinco (5) años de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, a partir del 29 de julio de 2006, con la expedición de la Ley 1066 de 2006, así: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

Que la prescripción extintiva de las obligaciones se puede interrumpir civil y naturalmente, tal como lo señala el artículo 2539 del Código Civil, y por aplicación del artículo 818 del Estatuto Tributario y la Ley 1066 del 2006. **La prescripción se interrumpe por los siguientes casos:** a) **Notificación del mandamiento de pago**, b) Suscripción de Acuerdo de Pago, c) Por admisión de la solicitud del proceso de reorganización, reestructuración o liquidación judicial y d) Liquidación forzosa administrativa. **Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.**

Señala el artículo 17 de la Ley 1006 de 2006, “Lo establecido en los artículos 8 y 9 de la presente ley, para la DIAN, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras entidades públicas. Para estos efectos, es competente para decretar la prescripción de oficio el jefe de la respectiva entidad”:

Que el numeral 3° del artículo 11 de la Resolución 5003 del 17 de septiembre de 2020, autorizó a los funcionarios ejecutores para decretar de oficio o a solicitud de parte según corresponda, el saneamiento de cartera, entre otras por la causal de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones que se encuentren en etapa de cobro coactivo.

Que el artículo 817 del Estatuto Tributario y en el artículo 58 de la Resolución 5003 de 2020 señalan que el término de prescripción se configura al cabo de 5 años contados a partir de

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

la fecha de la ejecutoria del respectivo acto o sentencia de la fecha de su exigibilidad, en tratándose de documentos que constituyan títulos ejecutivos provenientes del deudor.

Que la prescripción extintiva de la acción de cobro se configura por el vencimiento del término que tiene el acreedor de iniciar una acción contra el deudor para el cumplimiento de una obligación, dicho de otro modo, esta institución jurídica priva al acreedor del derecho de exigir judicial o administrativamente al deudor el cumplimiento de una obligación.

Es importante señalar y como bien lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C- 895 de 2009, que el término de prescripción de la acción de cobro encuentra su sustento en los principios de seguridad jurídica, orden público y paz social, lo cual implica que no deba mantenerse de manera indefinida una situación que afecta los derechos de los particulares. Lo anterior fue corroborado por la Corte Constitucional en sentencia T-581 de 2011, en los siguientes términos:

“La Prescripción extintiva tiene una estrecha relación con principios constitucionales como el orden público, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica, por ello es protegida de nuestro ordenamiento. En efecto, en los casos en los que el titular de un derecho permanece indefinidamente sin ejercerlo, no solo se encuentra involucrado el interés particular, sino también el interés general en la seguridad jurídica del ordenamiento y estabilidad de las relaciones.”

Igualmente, es del caso señalar lo establecido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020060127501 (18429), 02/16/2016):

“Cuando la legislación tributaria se refiere a deudas manifiestamente pérdidas o sin valor, el artículo 79 del Decreto 187 de 1975, las define como aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo, por insolvencia de los deudores o fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, aclaró que dicha disposición no es taxativa respecto de las gestiones que se deben realizar para acreditar la existencia de estas deudas, sino que remite a pautas determinadas por la sana práctica comercial. **Dado el amplio margen de apreciación que otorga la norma, puede acudir, por ejemplo, a los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por ser inviable su cobro; la demostración de la insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, entre otros.** De esta manera, la corporación administrativa precisó que, en la solicitud sobre deducción de la cartera perdida o sin valor, por ser imposible su recuperación, *“debe demostrarse no sólo la existencia de la cartera y los requisitos generales antes mencionados, sino, además, la realización de diligencias orientadas a su recuperación y la existencia de razones para considerarla como perdida”* (C.P. Hugo Fernando Bastidas).

Que, en el presente proceso, se adelantaron múltiples diligencias tendientes a investigar acerca de bienes de propiedad de la deudora en las Oficinas de Registro de Instrumentos;

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Secretarías de Tránsito Municipales y Departamentales y entidades financieras; sin que esa búsqueda arrojará algún resultado positivo; no obstante, que fue posible a través de estas pesquisas obtener información de unas cuentas de ahorros de la demandada en entidades financieras y una motocicleta, las cuales fueron embargadas, sin que pudiera obtenerse pago parcial o total de la obligación; por cuanto el saldo siempre se encontró dentro del límite de inembargabilidad señalado por la Ley y el automotor nunca fue puesto a disposición del ICBF. Lo anterior hizo en consecuencia imposible la recuperación de los dineros adeudados a esta entidad.

Que, revisado el expediente, se observa que el mandamiento de pago expedido mediante Resolución **097 del 12 de octubre de 2016**, fue notificada la señora **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, identificada con cédula de ciudadanía **31272899**, mediante aviso en el Diario La Opinión de Cúcuta, publicado el 21 de diciembre del 2016. Lo anterior nos indica, que el término de prescripción se interrumpió, empezando a correr nuevamente, a partir del día siguiente a la notificación, es decir; el 22 de diciembre del 2016; lo que significa que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años desde la interrupción del mismo, entendiéndose por lo tanto, que la obligación a cargo del ejecutado, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$541.446,00)**, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso, se encuentra prescrita conforme lo establecen los artículos 817 del Estatuto Tributario y 57 de la Resolución 5003 del 17 de septiembre del 2020.

Es necesario precisar que por otra parte los términos del presente proceso coactivo permanecieron suspendidos por espacio aproximado de dos meses, en atención a lo dispuesto en la Resolución 3110 del 01 de abril de 2020 y 3601 del 27 de mayo del 2020, expedidas por la Dirección General del ICBF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO en el Proceso de Cobro Coactivo 041 del 2016 adelantado en contra de la señora **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, identificada con cédula de ciudadanía **37.272.899**, con relación a la obligación contenida en la providencia proferida el 23 de junio del 2016, por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander, en la cual se en la cual declaró que el menor **YULIAN ANDREI ROMERO PARRA** nacido en Cúcuta el 21 de noviembre de 1998, **no** es hijo biológico del demandante, a la vez que se le condenó a la demandada a reembolsar al ICBF los dineros que ésta entidad canceló al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por concepto de la práctica de la prueba de ADN ordenada en dicho proceso, los cuales ascienden a la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$541.446,00)**, obligación respecto de la cual el ICBF, mediante Resolución **097 del 12 de octubre de**
Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

2016, libró mandamiento de pago a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Regional Norte Santander, ordenándole cancelar el valor indicado, más los intereses moratorios causados diariamente a la tasa del 12% efectiva anual hasta el momento del pago total de la obligación, más los costos que se generen en el proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR TERMINADO el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo 041 de 2016, adelantado en contra de **YULLI GIOVANNA PARRA CONTRERAS**, identificada con cédula de ciudadanía **37.272.899**.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión al Grupo Financiero del ICBF- Regional Norte de Santander para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: REALIZAR el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en el Proceso de Cobro Coactivo 041 de 2016 adelantado en contra del demandado.

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE copia de la presente Resolución a la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: ARCHÍVESE el expediente y háganse las anotaciones respectivas.

Dada en San José de Cúcuta, el 02 de marzo del 2022

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ERNESTO GALVIS GONZALEZ,
Funcionario Ejecutor ICBF-Regional Norte de Santander

Elaboró: E.Galvis

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma